



Sin embargo, Miguel López Camacho y otras fuerzas políticas entienden que no es preciso hablar de «cerrar el campo». Para López Camacho, «la verdad es que el campo no se va a cerrar. No es una empresa amurallada. El campo no tiene ni vallas ni puertas. Hace falta una nueva mentalidad en el agricultor y un programa agrario serio y responsable por parte del Gobierno». El diputado provincial del Partido Socialista Obrero Español asegura que son muchos los problemas: «Los precios no son justos. Hay que planificar el campo. Mientras el agricultor cultive anárquicamente —continúa— no es posible resolver el problema».

También habla López Camacho de la sequía y asegura que «la distribución de los 59.000 millones que la Administración acordó para este fin», no ha sido todo lo realista y operativa que debiera.

Las cifras son temerarias. «Estamos tocando techo», aseguró recientemente el secreta-

rio general de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Miguel Ramírez. En 150.000 millones parece haber mermado el Producto final agrario nacional. La patronal agraria asegura que pronto se llegará, a nivel de Estado, a un endeudamiento cercano al billón de pesetas, mientras la Administración habla de sólo 800 millones.

Se exigen precios de campaña acordes con la situación, una regularización de las mismas campañas, extensión de los créditos y sus plazos, bajo condiciones asequibles y con dinero oficial y ayudas para la sequía y las situaciones catastróficas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura estima que existen una falta de rentabilidad en las explotaciones y habría que racionalizarlas; que hay una capitalización irrelevante y coincide con los agricultores en que los créditos de campaña son insuficientes, pero también sabe que «están mal empleados».

LA DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA

Más de 13 millones de pesetas recibieron distintos Ayuntamientos de nuestra provincia, como «ayudas para máximas emergencias» referentes a la sequía, durante el año 1982. Estas ayudas, que indirectamente afectaron al campo al descargar en cierta manera las alarmas por sequía, llegaron a alcanzar las cifras de 3,4 millones en 1980.

Por otra parte, «la Comisión de Agricultura de la Diputación Provincial ha hecho frente a los problemas de este ejercicio con arreglo a los medios asignados en los presupuestos», afirma el diputado provincial por Unión del Centro Democrático y presidente de la Comisión de Agricultura, Miguel Sánchez Bustos.

Miguel Sánchez Bustos estima que «la actual Corporación, considerando la importancia del sector agrario en nuestra provincia y en el conjunto de la región de Castilla-La Mancha; teniendo en cuenta que las actividades agrarias y ganaderas ocupan un 35 por ciento de la población y que el Producto Interior Bruto Regional derivado del sector agrario es de un 25 por ciento, ha intentado imprimir una dinámica eficaz de apoyo a este sector».

Las medidas iniciadas en este terreno hacen referencia a una serie de programas y proyectos que, tras la constitución de los Departamentos autonómicos, deberán ir ligados a la actuación de los mismos y de la propia Junta de Comunidades, a través del Programa Económico Regional para Castilla-La Mancha (PERCAMAN).

En lo concerniente a investigación agraria, «la Diputación —señala Miguel López Bustos— en su finca Galiana, dentro de sus posibilidades económicas y en sucesivas fases, llevará a cabo la creación de un Centro de Investigación Agraria y Ganadera, con la implantación de campos de ensayo, estudio de costes, experimentación de